

Al plenario N° 138 del CC Comuna 7
Comisión de Género y Diversidades

Hemos atravesado otro 3J con la impunidad de quienes ejercen violencia sobre nuestras vidas, el desinterés de los gobiernos actuales sobre políticas específicas de contención y prevención más las limitaciones y desidia del sistema de justicia que revictimiza y muchas veces llega tarde

La violencia por motivos de género continúa siendo una de las expresiones más crueles de la desigualdad que atraviesa nuestra sociedad; constituye una realidad estructural que vulnera derechos, limita proyectos de vida y sigue cobrando víctimas en todo el país.

Entre el 1 de enero y el 30 de mayo, se reportaron 104 casos (90 femicidios de mujeres/niñas, 5 transfemicidios y 9 femicidios vinculados) En 436 de los casos las víctimas habían realizado denuncias previas, y 188 de los agresores tenían medidas cautelares vigentes. La mayoría de los asesinatos ocurrieron dentro del hogar, evidenciando que la vivienda sigue siendo el lugar más inseguro. Como consecuencia de estos crímenes, 3.840 hijas e hijos perdieron a sus madres (el 65% de ellos son menores de edad). Esto demuestra que las violencias machistas se desarrollan muchas veces en ámbitos cotidianos, sostenidas por relaciones desiguales de poder, dependencias económicas y afectivas, y silencios que durante años fueron naturalizados.

Frente a quienes buscan desacreditar la palabra de las víctimas, es importante señalar que los estudios existentes coinciden en que las denuncias falsas representan un porcentaje mínimo. Muchas denuncias no prosperan no porque la violencia no haya existido, sino por las dificultades para reunir pruebas, por el miedo, la revictimización o la falta de acompañamiento adecuado. Instalar discursos que ponen en duda sistemáticamente a quienes denuncian solo favorece la impunidad y desalienta a quienes necesitan pedir ayuda.

Nos preocupa profundamente el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género. Los recortes sobre programas de acompañamiento y dispositivos de atención afectan directamente la capacidad del Estado para brindar contención, asistencia y protección a quienes atraviesan situaciones de violencia. Cuando se retiran recursos, quienes más sufren son las víctimas.

También observamos con preocupación los ataques permanentes a la Educación Sexual Integral. La ESI es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más libre e igualitaria. No solo brinda información, sino que promueve el respeto, la autonomía, el reconocimiento de derechos y la prevención de situaciones de abuso y violencia. Defender la ESI es defender el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en entornos más seguros y libres de discriminación.

Como comisión reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de cada uno de los derechos conquistados. Sabemos que ninguno de ellos fue un regalo: fueron el resultado de años de organización popular, de lucha colectiva y de la decisión de miles de mujeres y diversidades que se movilizaron para transformar la realidad.

Porque detrás de cada denuncia hay una persona que está pidiendo ayuda. Porque detrás de cada femicidio hay una ausencia irreparable. Y porque la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria sigue siendo una tarea colectiva que nos convoca todos los días.